

Colonización en armas y narcotráfico. La violencia en Colombia durante el siglo XX

Carlos Mario Perea
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales (IEPRI) de la Universidad
Nacional de Colombia

*A la memoria del maestro
Orlando Fals*

Resumen

El artículo mira la historia de la violencia y el conflicto armado en Colombia durante el siglo XX a través de tres grandes problemas: primero, los cuatro episodios violentos; segundo, las características de dichos episodios en relación con Latinoamérica; y tercero, las fragmentaciones tras de las cuales se explica la recurrencia de la guerra y la violencia. El artículo hace una mirada particular desde la cultura política.

Palabras clave: Violencia, conflicto armado, cultura política, conflictos agrarios y sistema de partidos

Abstract

The article see the history of violence and armed conflict in Colombia through the twentyth century, considering three big troubles: first the four violent episodes; second the characteristics of this episodes in relation with Latin-America; and third the fragmentations that explain the permanency of the war and violence throughout the century. The article has a particular seeing from political culture.

Keywords: Violence, armed conflict, political culture, rural conflicts and party sistem

Introducción

La experiencia violenta de Colombia durante el siglo XX es, quizás, el asunto más espinoso de su historia contemporánea. Detrás de ella aguardan pre-

guntas acuciantes. ¿Por qué se ha prolongado tanto tiempo el conflicto armado y en razón de qué resulta tan escurridiza la paz? ¿Cuándo empezó el desangre y por qué tanta muerte no sirve para el inicio de un nuevo tiempo?

Frente a tales interrogantes, y en medio de un conflicto que suele cobrar niveles degradantes de atrocidad, cualquier intento de respuesta está preñado de consecuencias. Está la tentación de no ver sino guerra y desolación, en cuyo caso la sociedad se reduce a mero reflejo del hecho sangriento; o, por el contrario, salta el impulso de reducir la contienda a la práctica instrumental de unos cuantos actores criminales, en cuyo caso la violencia queda mutilada de su nexa con la sociedad. En ambos casos, anulado el contexto donde toma cuerpo la práctica violenta, resulta casi quimérico concebir la paz. En el primero porque la sociedad se reduce a la violencia y por tanto se le condena al caos y el sinsentido; en el segundo porque una vez recluida la violencia en un puñado de actores la sociedad queda eximida de toda responsabilidad.

En el intento de caminar más allá de las trampas que tienden estas alternativas opuestas, concebimos los episodios violentos del siglo anterior bajo la lente de un doble movimiento, uno que desarticula y otro que conecta. Entre las violencias del siglo XX existe toda suerte de fracturas. Comenzando por la discontinuidad que introducen los 44 años de paz que hubo en la primera mitad de siglo, interrumpidos sólo por un fugaz pero contundente episodio en los años 30¹. Además, de un episodio violento al siguiente hay un sinnúmero de diferencias, tanto en la intensidad como en la naturaleza de la violencia: una cosa son las guerrillas de comienzos del siglo XX y otra bien distinta las de inicios del XXI. Desde esta perspectiva las violencias de la centuria pasada aparecen inconexas y desarticuladas, cada una imbuida de su propia autonomía. Es el movimiento que desarticula. Empero, del otro lado, tales violencias no dejan de tener articulaciones provenientes de la continuidad que tiende el proceso de construcción del estado y la sociedad: ambas guerrillas –las de inicios de cada siglo–, están conectadas al encadenamiento que supone su condición de expresión de la trama histórica de un mismo país. La afirmación hay que explicitarla como punto de partida; en Colombia el sustrato histórico sobre el que se proyecta la guerra suele ser escamoteado². Es el otro movimiento, el que conecta. Una historia ha de considerar ambos movimientos.

Las fracturas será lo primero por avocar, antes de nada es necesario mirar cada episodio violento. Es el contenido de la I parte de nuestro escrito, apretado

¹ Llamamos “episodio violento” aquella contienda que se convirtió en motivo de controversia nacional. Entre 1902 y 1946 hubo numerosos hechos violentos, en especial durante las gestas electorales, pero sin que ellos trascendieran al plano nacional; de allí los 44 años de paz entre 1902 y 1946.

² Para algunos la violencia colombiana arrancó apenas en los años 70 con la aparición del narcotráfico. Es la corriente interesada en reducir la violencia a la criminalidad. Una muy buena exposición de este punto de vista en Montenegro y Posada (2001).

por razones de espacio. Luego es factible considerar los vínculos entre uno y otro episodio, sus proximidades y distanciamientos. Es el tema de la parte II. Desde allí se abordan los determinantes de la larga duración de la violencia, esos que entretejen la continuidad de uno a otro episodio. Será el objeto de la III parte.

Cabe entonces, a manera de hilo conductor, una afirmación. Cada episodio violento posee su especificidad. Con todo, en la madeja del acontecer nacional algo se ha quedado suspendido y por ello la violencia vuelve y resurge bajo nuevos ropajes, un algo que conecta al guerrillero de principios del siglo XX con el de la mitad de la centuria, y a los dos con el insurgente actual. Ese algo “suspendido” se relaciona con la presencia de fragmentaciones “no resueltas”: sea por la desagregación y la fractura de los tejidos sociales como resultado de un problema agrario nunca resuelto (la colonización); sea por la existencia de escisiones creadoras de antagonismos “insuperables” en conexión con la lucha partidaria (la ciudadanía en armas); sea por la hegemonía de poderes ejerciendo su dominio sobre el estado y lo público (el narcotráfico).

Dichas fragmentaciones provienen de distintos lados, atadas a temporalidades y esferas de operación diferenciadas: la colonización echa sus más remotas raíces en los dilemas agrarios que arrancan en la Colonia; el partidismo, encargado de instalar la intramitable diferencia entre liberales y conservadores nace a mediados del siglo XIX; el narcotráfico, ese acontecimiento que proyectó la guerra a la espiral envolvente encargada de despedazar el país, data de la década del 70 del siglo pasado. Las tres fragmentaciones –o determinantes de la larga duración–, se superponen y producen el acto violento en conexión con el momento histórico y las circunstancias de la política nacional, el estado de las fuerzas colectivas, las particularidades regionales. ¿De qué maneras las tres fuentes de la fragmentación, puestas en su especificidad histórica, hicieron su contribución al ovillo sobre el que rueda la guerra del siglo XX en Colombia? Será la pregunta que servirá de norte a nuestra reflexión.

I. Los episodios

El siglo XX en Colombia está cruzado por cuatro grandes episodios violentos³. Primero la guerra de los Mil Días (1899-1902); segundo los enfrentamientos al inicio de la República Liberal (1930-1934); tercero la Violencia de mediados de siglo (1946-1965); y cuarto la violencia contemporánea (1965 hasta hoy). A grandes rasgos, ¿en qué consistió cada uno de ellos?

³ Hay dos excelentes balances de la violencia en Colombia. El más completo González, Bolívar y Vázquez (2006). El otro Peñaranda (2007).

A. La guerra de los Mil Días (1899-1902)

La contienda que cierra el siglo XIX y abre el XX, llamada de los Mil Días por los tres años de su duración, fue un enfrentamiento entre las colectividades políticas tradicionales, los partidos liberal y conservador⁴. Este último venía detentando el poder desde hacía un poco menos de dos décadas, desde cuando derrotaron a sus adversarios a comienzos de los años 80. Fue un tiempo suficiente para emitir un conjunto de reglamentaciones destinadas a proscribir del poder y la burocracia a los liberales, quienes, desde la oposición, clamaban por reformas que incluían la descentralización administrativa, la reforma electoral, la libertad de expresión y la apertura a la oposición, entre otras⁵. La intensidad del exclusivismo conservador y, de contramano, de la discriminación liberal, hicieron que el gobierno fuera señalado con el calificativo de “tiranía de partido”.

Las fuentes de tensión no provenían sólo de la oposición, venían de distintos lados. El conservatismo se hallaba fraccionado entre el ala de los nacionalistas, afectos al régimen, y el ala de los históricos, cercanos a los proyectos de reforma propuestos por el partido liberal. Además los centros de poder regional y local sentían menguados sus intereses a raíz del proceso centralizador, mientras el sector financiero veía afectados sus ingresos por la introducción del papel moneda. El gobierno tenía entonces más de un contradictor. Luego de uno y otro intento, todos fallidos, de abrir algún camino a las pretensiones de la oposición y dar curso a las reformas, la guerra estalló en octubre de 1899. La marcó la intensidad de los enfrentamientos y su extensión a la totalidad del territorio nacional, hasta el punto en que se considera la guerra más cruenta de las siete que hubo a lo largo del siglo XIX. A ella pertenecen los nombres de las batallas memorables a los que se ligó la memoria colectiva de la guerra decimonónica, tales como Peralonso, Palonegro y la Humareda. Del lado liberal se movilizaron más de 26 mil combatientes mientras el gobierno comprometió todas sus energías a fin de sofocar la rebelión.

B. La violencia liberal (1930-1934)

El silencio de las armas se impuso durante tres décadas. La atmósfera se caldeó, no obstante, cuando la elección presidencial de 1930 comprometió el mando sobre el aparato de estado: el partido en el gobierno es derrotado abriendo

⁴ Sobre la guerra de los Mil Días Jaramillo (1991), Medina y Sánchez (2003), Sánchez y Aguilera (2001) y Bergquist (1981).

⁵ El partido conservador centralizó el estado en contra del proyecto de federalización liberal vigente durante años anteriores. Dicha centralización tomó cuerpo en una carta constitucional de corte confesional y religioso emitida en 1886, cuya vigencia se prolongó hasta la Asamblea Constituyente de 1991.

paso a la república liberal⁶. Para ese entonces los conservadores completaban casi 50 años en el poder, tiempo durante el cual habían consolidado su exclusividad sobre la burocracia estatal. De tal suerte, el triunfo liberal convertía la alternación en un problema espinoso. Bien pronto varias regiones se ven comprometidas en hechos de sangre; sin embargo, no será sino hacia la zona nororiental del país donde el enfrentamiento adquiere ribetes de guerra civil, en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander.

El nuevo grupo dirigente, compuesto por caciques políticos, funcionarios estatales y policías municipales, en asocio con cuadrillas del nuevo partido en el gobierno, se dieron a la tarea de liberalizar la región mediante la persecución, el destierro y tantas veces el aniquilamiento de conservadores. La respuesta no se hizo esperar, los miembros de la colectividad perseguida se organizaron en destacamentos para la defensa. Ya en 1931 la zona era motivo de alarma nacional. Abundaban los grupos armados de uno y otro bando debatidos entre la acción política y el bandolerismo. Los liberales se quejaban de las avanzadas de los campesinos conservadores y estos denunciaban los atropellos de los jefes de gobierno y sus organismos de seguridad.

La violencia de la República Liberal duró unos pocos años. Con todo, pese a su breve duración, el episodio no puede ser soslayado. Sus acontecimientos muestran con claridad el papel que tiene el partido liberal dentro de la cultura política por entonces vigente. En contravía de la lectura liberal que se ha impuesto de la historia nacional, según la cual el conservatismo es el responsable de las crisis y la violencia, los sucesos de los años 30 revelan a un liberalismo haciendo uso de la persecución y la masacre en el intento de imponer sus mayorías.

C. La violencia con mayúscula (1946-1965)

Una vez acallado el conato violento de la república liberal los grandes choques vuelven y desaparecen, esta vez por un corto tiempo. En 1946 hay una contienda electoral a la que concurre el partido liberal dividido en dos fracciones, ninguna de las cuales logra vencer al rival conservador. Sobreviene una nueva alternancia partidista⁷. Desde el mes de agosto aparecen las primeras noticias de enfrentamientos en el sur del país y ya para comienzos de 1948 se han extendido a una buena porción del territorio nacional. Siguiendo la impronta de los años 30 el partido conservador lanza desde el estado una violencia apoyada en élites locales, alcaldes y policías, generando, como reacción, la organización de destacamentos armados entre los liberales perseguidos.

⁶ La violencia de los años 30 ha sido poco estudiada y hoy todavía se pretende hacer caso omiso de ella argumentando su brevedad y limitación a una región. Mirar Guerrero (1991).

⁷ La Violencia de mitad de siglo en Pécaut (1987), Ortiz (1985), Sánchez y Meertens (1985).

Lo que bien hubiera podido ser otra escaramuza disparada por el cambio de burocracia, tal como sucedió pocos años antes, se convirtió en una “guerra civil no declarada” —como se solía decir entonces—, catapultada sobre dos factores condicionantes. En primer término el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, a la sazón jefe del partido después de resonantes victorias electorales. Del otro la Violencia reposó en la existencia de una conflictiva movilización social tanto rural como urbana. Desde mediados de los años 20 habían emergido focos de resistencia que en los 30 negociaron con el liberalismo; hacia mediados de los 40 tal pacto se desmoronó, el liberalismo decide gobernar sin pueblo y los sectores populares están abocados a construir su autonomía política. En realidad Gaitán encarnaba el signo de la movilización, fundiendo en él los dos condicionantes. La inesperada muerte del caudillo propicia la más notable insurrección popular de la historia colombiana; mas, tras el inmediato fragor, la consigna de la revolución se apaga y entre las cenizas la violencia se potencia.

La Violencia comienza desde el momento de posesión del presidente en 1946 pero encuentra su motivo de escalamiento en los sucesos del 9 de abril. El hostigamiento provoca una vasta movilización de campesinos liberales dispersa en varios departamentos. El panorama se modifica con el golpe de Rojas Pinilla, un hecho que crea las condiciones para un segundo período coincidente con el gobierno militar (1953-1957). La cresta violenta desciende. El general formula una amnistía a la que se acoge buena parte del movimiento en armas incluyendo los destacamentos del Llano; de allí en adelante la confrontación se prolonga entre el ejército y los grupos renuentes a la rendición y entrega. Por último, con la caída de Rojas y el comienzo del Frente Nacional se origina el tercer período (1957-1965). La repartición milimétrica de los cargos del estado entre las dos fuerzas políticas, alternando la coloración partidista del presidente, desactivó de manera definitiva la centenaria fuente de enfrentamiento político: la lucha entre liberales y conservadores. Sin embargo los enfrentamientos no se esfumaron de inmediato. Los grupos armados, ahora desprovistos de la legitimidad que les daba la lucha contra el gobierno —el motivo que los cohesionó durante las dos fases anteriores, en especial durante la primera—, derivaron en expresiones de bandolerismo político. Florecieron en algunas regiones, aquellas donde hubo una despiadada persecución oficial sin que el campesinado llegara a organizarse para la resistencia⁸. El episodio de la Violencia de mediados de siglo concluyó cuando el ejército terminó de aniquilar los bastiones bandoleros hacia mediados de los años 60.

⁸ Es el caso del norte del valle, norte del Tolima y la zona cafetera. El bandolerismo político no prosperó, bien en zonas de latifundio, bien donde el campesinado se organizó. Sánchez y Meertens (1985).

D. La violencia contemporánea (1965-¿?)

Con todo, la paz no llegaría a Colombia. Al tiempo que el ejército estaba comprometido en el aniquilamiento del bandolerismo se iban gestando los detonantes que habrían de empujar el surgimiento del nuevo episodio violento: de un lado la recomposición de una vieja resistencia; del otro la irrupción de la guerrilla moderna. Así es, a comienzos de los años 60 unos resonantes debates en el parlamento imponen la acción militar sobre las llamadas “repúblicas independientes”, zonas campesinas del sur del Tolima conformadas al tenor de la violencia de los años anteriores y en esos años de influencia comunista. La zona de Marquetalia, centro de un proyecto de gestión autónoma de la vida campesina, es atacada sin miramientos por tierra y aire. La fuga de las familias hacia el piedemonte de la cordillera oriental bajo el resguardo de sus destacamentos armados, bautizadas con el nombre de columnas en marcha, daría origen poco después a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC).

No fue el único proceso de organización insurgente. La triunfante revolución cubana de 1959, un ejemplo que regó por el continente la semilla de la revolución socialista, propició la conformación de dos guerrillas más por esos mismos años: el ejército de liberación nacional (ELN) y el ejército popular de liberación (EPL)⁹. Los dos detonantes se conjugaron. Uno anterior de base campesina y otro emergente de origen urbano, ambos conectados por el espíritu en aquellos años en auge: el proyecto de sustituir el estado y fundar un orden social alternativo. En la década siguiente vendrá una segunda generación guerrillera de la mano del surgimiento del M-19, el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Autodefensa Obrera (ADO)¹⁰. Para el final de los años 70 era inocultable la existencia de un renovado escenario de resistencia armada. El primer gobierno de los años 80, presionado por la realidad guerrillera, abre un ciclo de negociaciones que al día de hoy, mientras expira la primera década del siglo XXI, no logra terminar de exorcizar la guerra e imponer la paz¹¹.

En este largo trayecto que corre de mediados de los 60 a hoy es posible identificar cuatro períodos. El implante de la guerrilla contemporánea (1965-1982); los procesos de paz con la insurgencia (1982-1991); oscilaciones de la guerra y la paz (1991-1997); y la era paramilitar (1991-¿?). El primer período se caracteriza por un lento pero diversificado proceso de implante guerrillero en dos cortes, unas en los 60 y las restantes en los 70. Después del ataque a Marquetalia las FARC fueron objeto de persecución sólo en ciertas regiones como la zona cafetera, donde fue repelido su intento de inserción. El ELN y

⁹ Las FARC se constituyen de manera definitiva en 1966, el ELN en 1965 y el EPL en 1967.

¹⁰ Para una sociología de la guerrilla Pizarro (1996).

¹¹ En 1990 se suscribe la paz y el retorno a la vida civil del M-19, una fracción del EPL, el PRT y el Quintín Lame.

el EPL, de manera distinta, recibieron el chaparrón de una avanzada militar durante la primera mitad de los 70, la operación Anorí que les dejó al borde de la desaparición. Durante esos años las guerrillas no representaban un desafío que llegara a constituir motivo de preocupación. El aislamiento se trunca una vez hace su singular aparición el M-19, una guerrilla urbana que desde el manejo de símbolos nacionales propone como problema político prioritario el asunto de la paz.

Será en los años 80 cuando el gobierno abra un amplio proceso de diálogo nacional tendiente a introducir un conjunto de reformas. Las guerrillas en su conjunto ingresan a las conversaciones, aunque cada una lo hace articulada a acuerdos independientes. El proceso camina en particular con el M-19 y las FARC, con quien se pacta la constitución de un brazo político bajo el nombre de Unión Patriótica (UP). Por desfortuna la iniciativa aborta. Desde el estado hizo mella la desarticulación de la negociación de una guerrilla a otra y la resistencia de varias de sus agencias, en especial de los cuerpos de seguridad; desde la guerrilla la paz sirvió como excusa para expandir su presencia sobre nuevos territorios. Entretanto dos nuevos actores hacen irrupción complejizando al extremo el panorama del conflicto. Tan pronto arrancan las conversaciones emerge en el Magdalena Medio la fuerza paramilitar¹²; y a lo largo de la segunda mitad de los años 70 se iba incubando el fenómeno que transmutó el escenario de las violencias y, con él, el destino nacional: el negocio del narcotráfico. El intento de la toma armada del palacio de justicia por el M-19 en 1985 —con la pretensión de hacer un juicio al presidente—, así como la brutal reacción de la fuerza pública, simbolizan el extravío de los signos políticos que registró la escena pública en los años venideros.

En medio de una importante dinámica democratizadora ligada a la descentralización administrativa, las elecciones de 1987 fueron el escenario del más siniestro genocidio político que arrasó con la Unión Patriótica (UP) a manos de la persecución paramilitar, una organización que venía del intento de armar un partido político en su región de origen¹³. La segunda mitad de los años 80 es una página memorable de la historia colombiana por el exceso de anarquía y caos, el narco su mejor exponente. El país estaba avocado a un hondo proceso de reconstrucción, no había otra alternativa: en 1990 es lanzada la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente desde la que se formula una nueva carta de navegación nacional.

¹² Las FARC en Ferro (2002), los paramilitares en Romero (2003), el narcotráfico en Thoumi (1994).

¹³ Los cálculos más conservadores hablan del asesinato de 3500 miembros de la UP. La paz no se pudo recuperar de ese golpe mortal. Después de la masacre las posiciones guerrillistas dominaron la insurgencia, haciendo que se mire con descreimiento la posibilidad de regreso a la vida civil.

La paz y la superación de la crisis hallan una renovada vía de tramitación dando lugar al tercer período. En coincidencia con el plebiscito que le dio piso legal a la Asamblea Constituyente, el M-19, el Quintín Lame, una fracción del EPL y el PRT firman un pacto de paz. La Asamblea se instituye en depositaria de un cúmulo de esperanzas. Se concibió y desarrolló a la manera de un dispositivo que pusiera término a la exclusión, la politiquería y la injusticia. La primera traducción de dicho espíritu cobró cuerpo en el amplio espectro de actores sociales y políticos que formaron parte de su redacción. La segunda, por supuesto, adquirió vida en sus contenidos. La guerra amainó pero no desapareció. En el momento en que eran selladas las nuevas disposiciones constitucionales la aviación bombardeaba la zona del secretariado de las FARC, la guerrilla que junto al ELN se abstuvo de participar en la Asamblea.

Los dos carteles de la droga, cada uno en su momento, hacen un acuerdo con el estado e ingresan a la cárcel. Primero lo hará Pablo Escobar con la administración de César Gaviria (1990-1994) y luego los Rodríguez Orejuela con la siguiente, la de Ernesto Samper. El narcotráfico sufre una mutación. Se acaba la era de los grandes carteles, dando paso a otros pequeños y diseminados acompañados de un crecimiento exponencial de las áreas dedicadas a la siembra de coca, amapola y marihuana. Hacia mediados de los años 90 se llega a las 120 mil hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, una cantidad que sube a Colombia a la condición de primer productor de coca por encima de los antiguos proveedores, Perú y Bolivia. Los actores armados encuentran allí su palanca de expansión, cada uno desde una modalidad particular. De ese momento en adelante el conflicto armado se convierte en la confrontación a muerte por la coca. La consigna de la paz desaparece de la escena pública.

Para el año de 1997 el proyecto del paramilitarismo es un hecho nacional, ya no está circunscrito a unas determinadas zonas sino se expande sobre distintas regiones. Se nombran entonces como autodefensas unidas de Colombia (AUC), emprendiendo un contundente proceso de afianzamiento político y militar que instaura el cuarto y último período de la violencia contemporánea: la era paramilitar. Andrés Pastrana, el presidente que cierra el siglo XX (1998-2002), sube “escogido” por las FARC¹⁴. El país le apostó de nuevo a la paz, fue y sigue siendo su profunda aspiración. La piedra de toque de la pacificación vino a ser la concesión de una zona de 42 mil kilómetros cuadrados a la guerrilla, un área donde se retiró el ejército dejando al grupo insurgente con entera autonomía de gobierno.

En el 2002 Alvaro Uribe llega al poder en alfombra. Le recibía el terciopelo de una guerrilla aniquilada en lo político y un ejército en trance de tecnificación, los vínculos exteriores en un momento espléndido y, lo más decisivo,

¹⁴ Unos días antes de las elecciones la gran noticia es la reunión de Manual Marulanda, jefe de las FARC, con el candidato presidencial.

una nación exhausta de la conciliación y dispuesta a jugarle todo a la carta del exterminio. Su ascenso, además, se urde sobre el trasfondo del compacto afianzamiento del poder paramilitar. Las AUC materializan un sostenido proyecto político que aglutina en torno suyo una capa social emergente con clara vocación de dominio. No son, como suele pensarse, una simple respuesta a los desmanes insurgentes o una mera empresa criminal asociada al tráfico de drogas. Naturalmente emergen en contrapunto con la guerrilla y se alimentan del narcotráfico, ambos condicionan su surgimiento; pero desde sus comienzos se perfila como una fuerza encaminada a defender el establecimiento e impedir, a toda costa, cualquier reforma que pudiera resultar de los procesos de paz con la insurgencia. No de modo gratuito su aparición y los posteriores hitos de su consolidación se ligan al proceso de paz de 1982, a la elección popular de 1987 –cuando arrasan con la Unión Patriótica– y a la creación de la zona de distensión con las FARC en 1998. El éxito de su proyecto es fulgurante, incursionan en todas las esferas de la vida nacional. Desde lo político, tal como dejan ver los procesos judiciales seguidos a 82 congresistas por su nexos con el paramilitarismo, hasta lo económico mediante el implante de toda clase de empresas legales e ilegales.

II. De uno a otro episodio

La historia nacional no se achata en el fenómeno violento. No todo es confrontación sangrienta, ni la institucionalidad se reduce a ella ni el conjunto de los actores colectivos pasan por su ejercicio. Colombia no es por definición un país violento, como tampoco lo es, por alguna especie de esencia, la totalidad de sus habitantes. La práctica de la eliminación del Otro está situada en la trama histórica, todo lo cual supone que posee tiempos y geografías, ciclos y protagonistas –resulta evidente en la exposición anterior–. No obstante la experiencia violenta acompasa la esfera pública del siglo anterior, y lo hace con intensidad y persistencia. Desempeña su papel en la configuración del estado y las instituciones, incide en la armazón de los tejidos sociales y la constitución de las fuerzas políticas, impacta los procesos de ocupación del territorio y el crecimiento de las ciudades.

En estos términos, como se anotó en la introducción, tan estéril resulta la percepción de quienes ven la violencia a la manera de eje conductor del acontecer histórico, como la de quienes la acotan en unos breves períodos y un puñado de actores. No procede, pues, ni inflamarla ni reducirla. La inflación supone el desconocimiento de las muchas aristas que convergen en el complejo proceso de construcción de la nación. La reducción, por su parte, significa la negación de un retazo de la experiencia colectiva con los consabidos efectos que trae el olvido sobre la reproducción de las violencias –lo mostró el Frente

Nacional, un proceso de paz montado sobre el silencio de una violencia que bien pronto encontró renovadas formas de circulación—. Hay que repetirlo, en las dos versiones la sociedad queda suprimida: en la primera reducida a caos, en la segunda exenta de responsabilidad. Así pues, ¿dónde situar una violencia que está lejos de invadirlo todo pero cuyos rasgos vienen a ser la intensidad y la persistencia?

A. Singularidad colombiana

Ambos términos, intensidad y persistencia, tienen más de una complicación. El cuanto al primero salta la interrogación: ¿las confrontaciones colombianas están cargadas de una mayor cuota de horror? La guerra siempre trae consigo el aniquilamiento, más cuando se trata de guerras civiles. Sin embargo, más allá del número de homicidios, no existe un indicador al que se pueda apelar para establecer el grado de intensidad de las guerras colombianas respecto a las conflagraciones de otras naciones del continente y el mundo. Baste entonces con anotar la señalada crueldad de los enfrentamientos en Colombia. En cada uno de los cuatro episodios del siglo XX abundan los registros marcados por la elevada sevicia de los combatientes, no sólo con sus adversarios sino también sobre la población civil. En los cuatro casos el horror ha sido un ingrediente primordial del apremio de la paz. Desde los años 80 y hasta comienzos del siglo XXI, momento en el que se dispone de información segura, el país tuvo el triste título de nación singularmente violenta¹⁵. Todo indica que la violencia en Colombia alcanza grados insospechados de intensidad.

El término de persistencia, de su lado, es aún más problemático. Una vez puesta en perspectiva comparada la singularidad colombiana ha de ser delimitada con precaución. A lo largo del siglo XIX Colombia no es, en particular, más violenta que los otros países latinoamericanos; aquí como en el resto del continente se produjeron toda suerte de enfrentamientos armados. En Argentina hubo 117 revoluciones antes de 1870 y de ese momento hasta el final de siglo vinieron cuatro conflagraciones más. Chile, el país que suele ser evocado como la imagen de la democracia y la no violencia, tuvo numerosos desórdenes antes de 1830 y después enfrentó las contiendas de 1851, 1859 y 1891. No hay nación eximida de la guerra. Al igual que Europa, Latinoamérica debió transitar un duro período de guerras a fin de consolidar la nación que emergía una vez cerrados 300 años de dominación colonial.

El rasgo característico de Colombia se halla, así pues, en el siglo XX. De modo más preciso en la segunda mitad de la centuria: de los años 40 hasta el presente. No hay nada similar en el resto del continente. Con excepciones como la cruenta revolución mexicana, las centroamericanas de El Salvador y

¹⁵ En 1991 alcanzó una tasa de 93 homicidios por 100 mil habitantes y en el 2005 continuaba con una de 44. Cálculos sobre Estadísticas vitales, DANE.

Nicaragua y otras disputas de menor intensidad, los países latinoamericanos salieron del siglo XIX dotados de mecanismos que los salvaguardaron tanto de la guerra permanente como de la violencia endémica¹⁶. Pasaron, claro, por procedimientos no menos penosos como la dictadura y la dislocación institucional. Pero ninguno atravesó por algo siquiera parecido al conflicto armado de Colombia, el que ya se prolonga por algo más de 60 años. ¿Cómo descifrar esa permanencia?

B. Discontinuidad y continuidad

El siglo XX fue un tiempo de profundas mutaciones. Sucedió en el globo en su conjunto; Colombia, igual, fue escenario de mudas, incluyendo por supuesto el panorama de sus violencias. Entonces, ¿qué continuidades y discontinuidades hay entre uno y otro episodio? La guerra de los Mil Días está atada al siglo XIX; llevó la lógica de sus enfrentamientos al extremo y con ello dio por terminado un período de la guerra y la política. La violencia de la República Liberal se inscribe en una gramática distinta, una que anuncia la violencia que vendrá en la década siguiente. Los dos episodios tienen en común el sello del enfrentamiento entre las colectividades partidistas; no obstante entre uno y otro se abre un abismo de diferencias. Las graves secuelas de la guerra de los Mil Días, junto a la amenaza del surgimiento de fortines guerrilleros, pusieron término a la guerra canónica del siglo XIX. Fue la última ocasión en que las élites políticas movilizaron sus huestes en el propósito de derrocar el estado e instaurar un régimen alternativo, así como se acostumbró desde la Independencia¹⁷. Nada parecido acontece en los años 30. El proyecto militar para la toma del poder desaparece siendo sustituido por un estado que ejerce una violencia difusa pero eficaz sobre el contradictor político, quien a su vez se organiza en cuadrillas para resistir el hostigamiento.

Las violencias del 30 y el 40, por el contrario, participan de una misma naturaleza. Entre las dos corre un poco más de una década pero la distancia temporal no suprime la continuidad: el lugar que ocupan la colectividad que sube al poder del estado y la colectividad derrotada en las urnas, aunque con signos partidistas opuestos; la ausencia de las élites en el ejercicio de la guerra¹⁸ y la propagación de la práctica de las armas entre la población campesina. El enfrentamiento de la República Liberal dejó una honda marca, de manera

¹⁶ No se puede dejar de señalar la notable situación del triángulo norte de Centroamérica incluyendo El Salvador, Honduras y Guatemala. Los tres vienen experimentando, desde finales del XX y hasta la actualidad, un acelerado proceso de fragmentación atravesado por elevada violencia. Incluso desde hace algunos años tienen tasas de homicidio más elevadas respecto a Colombia.

¹⁷ La primera contienda civil estalló en 1839, conocida bajo el nombre de Guerra de los Supremos. Después de ella vinieron seis grandes confrontaciones hasta la guerra de los Mil Días.

¹⁸ La excepción será la región de los Llanos Orientales en los 40. En un principio los hacendados participaron en la movilización armada de cara a un proyecto de sustitución de poder.

especial en el departamento de Boyacá. Una vereda de nombre Chulavita, que fuera uno de los principales bastiones de la resistencia conservadora en los 30, se convirtió a la década siguiente en la cantera de los miembros que conformaron los temibles destacamentos que, a nombre del estado y del partido conservador, asolaron las regiones liberales; el motete de “la chulavita”, usado para designarlos, se extendió por todo el país impregnando las narraciones de aquellos días.

Finalmente, entre la Violencia y el enfrentamiento contemporáneo los vínculos son problemáticos. Tienen tanto de diferencia como de continuidad. De una parte cada una obedece a una naturaleza diferenciada. Dos de las guerrillas de primera generación lo revelan. El ELN y el EPL germinan ligadas a sectores urbanos radicalizados y su lucha carece de una línea de permanencia con las violencias anteriores. En ese sentido, mientras la Violencia es una contienda partidista, la guerra contemporánea es una lucha entre la sustitución versus la preservación del sistema: la guerrilla en la orilla del reemplazo, los paramilitares en el lado de la continuidad.

Empero, de la otra parte, y pese a las profundas diferencias en la naturaleza, entre uno y otro episodio hay una conexión nada despreciable. Las FARC encarnan de manera dramática el eslabón de encadenamiento. Ahora que la guerrilla desembocó en una profunda crisis de legitimidad —producto de la ausencia de visión política y el correlativo desenlace en el crimen y el exceso—, es preciso mirar más allá de sus desatinos a fin de calibrar en su justa medida el papel histórico que cumple. Es un hecho incontrovertible. La guerrilla más antigua del planeta fue comandada hasta marzo del 2008 por Pedro Marín, alias Manuel Marulanda o Tirofijo, un hombre cuya trayectoria vital entierra sus lejanas experiencias de guerra en las persecuciones conservadoras de los años 40. Era un liberal de pura cepa empeñado, primero en defender las familias del ataque conservador y luego en derrocar el gobierno de Laureano Gómez, el conservador en la presidencia a comienzos de los años 50. Desde bien temprano tuvo vínculos con los núcleos de resistencia comunista enfrentando el dilema de la guerra entre limpios y comunes, los primeros de filiación liberal y los segundos de confesión comunista. Multitud de acontecimientos lo fueron distanciando del partido tradicional mientras lo iban comprometiendo con los grupos indóciles a la negociación y la entrega incondicional. En el momento de los ataques a Marquetalia Pedro Marín hace parte de los proyectos de resistencia gestados en el Tolima¹⁹. Pasada la fuga hacia el otro lado de la cordillera participa en la fundación de la organización que algunos años más adelante

Más adelante entraron en conflicto con los campesinos quienes evolucionaron en un proceso de lucha anticlasista.

¹⁹ En el eje Tolima, Tequendama y Sumapaz se mantuvo una tradición de resistencia. No se hizo parte de las amnistías de Rojas y del Frente Nacional, tampoco se desarrolló el bandolerismo.

se vendrá a convertir en un factor de desestabilización sin precedentes, el más colosal imperio guerrillero, a título de jefe máximo. Tirofijo es sin duda un caso excepcional, nunca conoció la ciudad puesto que jamás salió del monte. Sin embargo su trayectoria es la metáfora de las encrucijadas que Colombia no ha logrado sortear, encrucijadas tras de las que aguardan la condición esquivada de la paz y la continuidad incesante de las violencias.

III. Fragmentaciones y larga duración

Se ha intentado la paz, sería necio decir lo contrario. Durante el episodio de la Violencia con mayúscula se emprendieron varias fórmulas, desde la participación de la oposición en el gobierno hasta la expedición de varias amnistías. El pacto del Frente Nacional cerró ese largo y atormentado período, el enfrentamiento partidista al fin cesó. Con todo, algo falló. Las nuevas violencias arrancaron cuando todavía no culminaba el exterminio de los bandoleros —la última expresión del partidismo—, originando, desde la década de los 80, otro ciclo de búsqueda de conciliación hasta el día de hoy infructuoso. Algo sigue fallando, las fuerzas que conjuran la violencia son más potentes que las iniciativas que pretenden instaurar la paz. Al momento presente, cuando arranca el nuevo milenio, la sensación preponderante es la de una violencia omnipresente e insensata dotada de ensambles casi imposibles de calar. Es la sensación dentro de Colombia pero también en el extranjero. Quizás es inevitable, el amargo sentimiento lo impone la larga duración de un cortejo fúnebre cuyos remotos orígenes se entierran por allá en los distantes años 40. La pregunta medular es, así pues, por los determinantes que generan fragmentación y con ello fijan la larga duración de la violencia: poblamiento, partidismo, narcotráfico. Miraremos uno a uno en el empeño de hallar su papel desencadenante de fragmentación.

A. La ocupación territorial (la colonización)

A mediados de los años 70 Tirofijo, en nombre de las FARC, le envía una carta al entonces presidente Alfonso López Michelsen. Si el gobierno se compromete a tramitar una reforma agraria —le escribe—, las fuerzas insurgentes entregan las armas y dan por terminada la lucha armada. Nada aconteció, como vimos en esos años la guerrilla no parece encarnar un desafío de consideración. La cuestión agraria es un telón de fondo de la guerra²⁰. Desde siempre, y aún hoy, las FARC son un ejército conformado en su mayoría por reclutas campesinos. Esa lucha, que no termina, se proyecta en el tiempo. El problema

²⁰ Sin olvidar, claro, que el determinante agrario, en cada caso, entra en relación con determinantes políticos y el narcotráfico.

de la tierra y su ocupación es el determinante de más larga duración, desde el período de la Colonia provoca fragmentación²¹.

Colombia es un país mestizo. La frase no pretende evocar un giro metafórico y menos un recurso posmoderno. Por historia, la condición mestiza de la población marcó de manera indeleble sus particulares formas de construcción del estado y la sociedad. Aquí no hubo las grandes civilizaciones que encontraron los españoles en México y Perú, y las muchas etnias existentes fueron o reducidas a la impotencia o enviadas más allá de las fronteras donde discurría la vida controlada por el poder colonial. Naturalmente, en una sociedad de castas la condición mestiza estaba marcada por la marginalidad, era considerada impura y por tanto reclusa en un rango bajo de la escala social. Pero por eso mismo significaba libertad, el mestizo no era objeto de la minuciosa legislación que reglamentaba lo indígena permitiéndole un grado relativo de movilidad.

Las poblaciones mestizas comenzaron a desplazarse desde esos lejanos años a tierras vírgenes ajenas al control institucional. El punto crucial es que dada su condición jurídica lo hacían lejos del amparo de la hacienda, la iglesia y el estado, enfrentadas por tanto a la obligación de dar curso a formas propias de regulación social. Las quejas en torno a las poblaciones insumisas libradas a su propia ley salpicaban el discurso de las autoridades coloniales. Una vez instaurada la república el desplazamiento de gentes a tierras deshabitadas no se detuvo sino, antes bien, se prolongó a lo largo de los siglos XIX y XX²². Aún en el nuevo milenio el proceso no culmina, así como lo testimonian las incursiones de las que son objeto hoy las selvas del Amazonas y el Chocó. Por supuesto durante los dos últimos siglos los ocupantes van investidos de un estatuto distinto. Los anima una colonización empujada desde muchos lados: el crecimiento demográfico y el acaparamiento de la tierra, la fuga de los acosos de la violencia o, con mucha frecuencia, la promesa de la propiedad y la independencia. La figura del colono a la manera de un sujeto “al margen” de lo instituido anima el poblamiento, tanto como la constitución de los tejidos sociales y el poder²³. Colombia es un país puesto bajo el signo de “la colonización campesina permanente”²⁴.

El proceso, no obstante, se verifica en medio del conflicto. Como describen varios trabajos el campesino pobre y sin tierra se desplaza a tumbar el monte y comenzar las siembras, protegidos por la ley que estipula la titulación de tierras baldías –propiedad del estado– a quien las integre a la frontera agrícola;

²¹ Seguimos en este punto el sugerente libro de González, Bolívar y Vázquez (2006).

²² Se calcula que a finales del siglo XIX las tierras baldías sumaban el 75%, a mediados del XX el 50%. La situación contrasta con países como México donde no se tiene noticia de colonizaciones durante el siglo XX.

²³ Las colonizaciones dirigidas por el estado o controladas por las élites también se dieron en ciertas regiones. La colonización espontánea es con todo la dominante.

²⁴ Según el giro de González, Bolívar y Vázquez (2006).

a la sombra de las zonas recién incorporadas vienen los empresarios agrícolas, quienes terminan adquiriendo las mejoras obligando a los colonos a someterse a gravosas condiciones de trabajo o a desplazarse a desbrozar nuevas tierras. El ciclo no ha dejado de perpetuarse, una y otra vez, dando origen a la arquetípica situación del agro colombiano: las zonas de mayor productividad acaparadas por unas pocas manos y dedicadas en mucho a la cría de ganado, en abierto contraste con la aglomeración campesina en las laderas de las montañas y las regiones lejanas²⁵. El estado no ha tomado cartas decididas en el asunto. Las iniciativas de reforma agraria han sufrido un proceso de reversión a favor de los intereses de los terratenientes.

La violencia acecha tras el nudo agrario. No de modo gratuito la cartografía de los grupos alzados en armas, a lo largo del siglo, coincide en buena medida con regiones de conflictos agrarios y zonas de colonización cercana. Sucedió en la guerra de los Mil Días. Las guerrillas que marcaron el salto al segundo período, lejos de ejércitos dirigidos por élites, se extendieron sobre una geografía que abarcó nueve departamentos; sin embargo su mayor presencia tomó cuerpo en los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Santander, regiones donde se concentró el 73% de los grupos²⁶. Una aglomeración de la resistencia violenta sincronizada en grado considerable con zonas que hace poco fueran incorporadas a la productividad agrícola. Otro tanto acontece en la Violencia. Las zonas de conflicto por la tierra de los años 30, junto a la región de la colonización cafetera, sirven de escenario a la confrontación. La contienda asumió signos distintos según el grado de integración de los sitios en cuestión. En aquellos donde predominaba la conexión institucional los enfrentamientos se mantuvieron dentro de los márgenes de la lucha partidista; en esos otros en los bordes de los circuitos establecidos la violencia, aunque pasaba por los términos de lo liberal y lo conservador, adquirió ribetes revolucionarios²⁷. La constante se repite en la violencia contemporánea. De buen grado el implante inicial de la guerrilla se produce en municipios de colonización reciente, hacia el piedemonte de la cordillera oriental y las tierras recién habitadas de los valles interandinos. La invasión del narcotráfico modifica de manera sustancial el panorama. Sin perder la inserción original en zonas retiradas, que servirán como zonas de retaguardia y apertrechamiento –y que se colmarán de cultivos ilícitos–, la guerrilla cambia el mapa de su implantación incursionando en sitios integrados donde se produce riqueza²⁸.

²⁵ La violencia contemporánea introduce modificaciones al ciclo. De un lado la ocupación comienza a producirse bajo el esquema de la colonización armada. De otro a mediados de los 90 los narcos producen una contra reforma agraria con sus exorbitantes compras de tierras.

²⁶ Jaramillo (1991, p. 103).

²⁷ El caso típico de los primeros es la zona del café, de los segundos los Llanos.

²⁸ El flujo paramilitar se verifica en dirección opuesta. Nacen en lugares de elevada integración y se movilizan a zonas retiradas a disputar la hegemonía guerrillera.

Una vez más, la guerrilla extravió su norte. Pero ese hecho capital no oculta la palmaria conexión entre las violencias y la cuestión agraria. La creciente criminalidad no suprime la historia, la de un país agrario y profundo que ha encontrado en el lenguaje de las armas una vía de tramitación al descontento y la frustración. El estado se ha mantenido de espaldas al nudo crucial de la tierra, un desentendimiento que no deja de palpitar bajo la superficie visible de la guerra: quizás un indicador más de la precariedad manifiesta para resimbolizar lo popular como un lugar para la reconciliación. La colonización permanente arrastra un secular proceso de fragmentación. Con todo, las fuerzas centrípetas que ella dispara no tendrían que traducirse, por fuerza, en armas y confrontación sangrienta. Es necesario el concurso de otros precipitantes, la escisión producida por el enfrentamiento entre las colectividades políticas su alfa y omega.

B. El partidismo (la ciudadanía en armas)

De un episodio violento al otro hay diferencias y continuidades, se vio atrás. No obstante, el conjunto de la violencia del siglo XX se puede periodizar en dos grandes fases: una donde la lucha se descifra en términos de la confrontación entre los partidos, abarcando la guerra de los Mil Días, la violencia liberal y la Violencia de mitad de siglo; otra en que la guerra se traduce en la contienda entre guerrilla y paramilitarismo. El signo partidista arranca entonces del siglo XIX y se prolonga hasta casi los años 60, cuando en 1958 se instituye el Frente Nacional.

La primera mitad de la centuria estuvo marcada por la paz. El giro hacia la violencia, tanto por la breve interrupción en los 30 como por su inicio definitivo en los 40, se produce sobre un mismo suceso: la alternación de los partidos en el poder. Es un acontecimiento notable. La guerra está exorcizada mientras permanezca ileso la continuidad del partido en el gobierno, no importa de cuál se trate; esta vez fueron los liberales mañana serán los conservadores. La paradoja es evidente. Justo cuando se produce uno de los mayores indicadores de la vitalidad democrática —el cambio de poder ante el triunfo de la oposición—, sobreviene la amenaza letal de la muerte. Allí aflora una muestra palmaria de los estrechos vínculos entre democracia y violencia, tan propios de Colombia —el tema se abordará en breve—. Por lo pronto, la paradoja también pone al descubierto la peculiar manera de constitución del partidismo colombiano. Ella es, en varios sentidos, la llave maestra de la violencia colombiana: ¿sobre qué sustrato resultó posible que el ascenso de la oposición al gobierno se tradujera en intento de exterminio del contrario?

Colombia, vista desde una cara, carece de antagonismos irreconciliables. No tuvo diferencias religiosas históricas al estilo de la oposición entre protestantes y católicos o entre musulmanes y cristianos, el motivo de sangrientas pugnas en otros lados. Tampoco hubo choques étnicos, el rápido mestizaje de la

población tuvo como correlato el marginamiento de las comunidades indígenas, mientras nunca se dio nada parecido a las masivas migraciones de extranjeros típicas del cono sur del continente. Igual no es el caso de autonomismos que sobre la base de diferenciaciones de lengua y tradición pujaran por la secesión y el separatismo. No hubo enemigos externos que amenazaran la unidad o la continuidad de la nación, salvo el efímero altercado con Perú a comienzos de los años 30. En fin, hasta la mitad de siglo el país no fue asiento de un abierto pugilato clasista, los dos partidos tradicionales congregaban entre sus filas desde refinados banqueros hasta paupérrimos campesinos sin tierra. Empero, vista desde la otra cara, la nación de ese entonces fue cruzada por la fragmentación “intramitable” impuesta por los partidos políticos, una capaz de provocar la movilización campesina más grande de Latinoamérica después de la revolución mexicana²⁹. Una mortífera movilización en nombre de la colectividad. Entonces, si la fragmentación partidaria no se funda en la etnia, la tradición, el enemigo externa o la clase, ¿de dónde abreva su fuerza prodigiosa?

Los partidos fueron los protagonistas de la construcción de la nación sobre los pilares del régimen político liberal. Los lenguajes de la democracia y la disputa electoral, la partición de poderes y la búsqueda de su equilibrio, la cimentación del estado y la definición de su autonomía frente a lo religioso, todos fundados en el ejercicio de la ciudadanía, ensamblaron la armazón sobre la que se hizo viable el legado de la Independencia. Los avatares de cada una de estas piezas, por aparte y en sus complejas interrelaciones, fueron un ingrediente sustantivo de la reyerta entre los partidos. Eso no tiene discusión. Con todo, la fragmentación partidista no se circunscribe a los disensos que invariablemente trae la edificación del orden político. Tampoco se agota en su cara perversa, ni en los malabares del clientelismo y las modalidades retorcidas del intercambio político, ni en las enrevesadas relaciones que conectaron los poderes locales y regionales con el flujo de los proyectos del centro y la nación. Naturalmente en cada caso surgen disputas y enconos, cada una de las cuales hace una contribución decisiva. Nuestro punto es, sin embargo, que la reclusión del partidismo dentro de los márgenes de la institucionalidad y sus deformaciones no termina de dar cuenta de la animadversión entre liberales y conservadores. Hay un insumo en la forma como el partido se proyecta sobre lo público que escapa a la racionalidad canónica de la modernidad; y ese insumo cuece el fermento de la violencia.

Ese sustrato ‘adicional’ viene encriptado en el giro de “los odios heredados”, una expresión empleada por ese entonces cada vez que el antagonismo partidista se inflamaba. El “odio”, ciertamente una realidad que resulta esquiva a la indagación de las ciencias sociales, pero que aparece conveniente como puerta de acceso a la hondura de la fragmentación partisana: entre los miembros

²⁹ En esos términos describió Eric Hobsbawn la violencia colombiana de mediados de siglo.

de una y otra colectividad se instaló un odio que llevaba a la espalda pasado e historia, de ahí su condición de “heredado”³⁰.

Cada tinte político concebía su ascenso al aparato de gobierno como el comienzo de un universo por entero distinto al del oponente. El término de “régimen” condensó esa imaginaria, cada grupo inaugura uno propio y distinto³¹. Para el siglo XX la columna vertebral del ensamble institucional está fuera de disputa³². Empero, tanto rojos como azules se siguen asumiendo como portadores de elementos sustanciales sobre los que reposa “otra” nación. El régimen propio no es sólo distinto, es inaugural y creador; el del otro amenazante y arrasador. El ascenso del contrincante al poder se vive, pues, como una fatalidad cierta. No por el simple contrapunto régimen versus régimen, al estilo de los choques políticos que dominaron occidente desde el siglo XIX hasta la caída del muro de Berlín. Se requieren otros apuntalamientos para que una vez en el solio presidencial se propale la persecución contra el adversario, así como pasó en los 30 y los 40. Además porque los intrínsecos del régimen son lo propio de las élites políticas, incluidas sus puntas de lanza en regiones y localidades; pero no son el marco de referencia bajo el que se mueven los campesinos cada vez que se movilizan para el enfrentamiento cruento. Más bien lo hacen, simplemente, porque cada colombiano, sin excepción, se vivía y definía como liberal o conservador. ¿Qué porta esa definición que hace posible el salto al acto violento?

El encuadramiento partidista de la sociedad, más allá de lo político, se gestó mediante el movimiento implicado en la invasión de lo público sobre lo privado, todo lo cual significaba la imposición de una particular adscripción al partido. La invasión se constata, en un primer momento, en la hegemonía de lo partidista sobre el conjunto de la vida colectiva. Hasta los años 50 el partido dictamina sobre los asuntos estatales, los movimientos sociales, la educación en la escuela y la universidad, las circulaciones discursivas, los contenidos legítimos de expresión artística³³. Pocos espacios escapan a su mirada vigilante. La presencia de lo partidista no se detiene ahí, en un segundo momento se toma la esfera de la vida privada. El espacio originario donde se cuece la identidad, la familia, es informado por sus insignias. La memoria familiar está atada a

³⁰ Lo que viene sobre el partidismo se apoya en un trabajo sobre la cultura política de los años 40. Perea (1997).

³¹ De allí la lectura de la historia colombiana hasta la mitad de siglo: las reformas liberales; el régimen conservador de 1880 a 1930; el régimen liberal de los 30 y mitad de los 40; de nuevo el régimen conservador.

³² Sólo Laureano Gómez trató de introducir reformas de fondo a las establecidas formas de representación y por ende a la arquitectura institucional. Su proyecto de carta constitucional no entró en vigencia.

³³ Los sindicatos terminan enfrentados por el signo partidista (la UTC conservadora y la CTC liberal); la educación se discute desde el partido; el arte se dictamina desde el estado y su filiación partidaria (en 1947 se censuró la visita del poeta Pedro Salinas por su tendencia marxista).

una moral cuya referencia ejemplar toma cuerpo en los patriarcas y la historia del partido al que se pertenece. A partir de allí los asuntos de claro resorte personal pasan por el rasero. Se censura el matrimonio con un miembro de la colectividad contraria, se vive entre adeptos a la causa, no se visten prendas con el color del opuesto y hasta la creencia religiosa es impuesta por el partido. La fe el mejor ejemplo. La población colombiana es en su conjunto de confesión católica. Pese a ello, cuando sobrevienen las épocas de crisis los liberales se convierten en ateos irredentos a quienes se somete a la exclusión mediante la excomunión, la negación de los sacramentos y la prohibición de asistir a la iglesia. De contramano a los conservadores se les imparte la orden de suprimir todo contacto con el universo liberal, como lo atestiguan los editoriales de primera plana de *El Siglo* según los cuales “se excomulga al conservador que lea *El Tiempo*”. El partido, la fe y una actividad tan personal como la lectura de prensa caen bajo el designio de la fragmentación partidista³⁴.

Con dicho asalto sobre lo privado la adscripción al partido está garantizada. La filiación no guarda relación ninguna con el individuo de razón que elige entre diversas opciones de poder, así como lo prescribe el evangelio de la modernidad. De forma distinta la opción por una coloración se hace sobre los códigos de la sangre y la herencia: se pertenece a la colectividad de la familia, es una ley inmovible de imposible desafío so pena de incurrir en un acto que viola el orden natural de las cosas. Se nace liberal o conservador, ser de este o del otro partido es asunto de pertenencia primordial y no de libre determinación ciudadana. El odio está sellado, no tanto en lo que trae consigo el régimen del contrario, sino más bien en la diferencia que entierra sus raíces en la vida privada; y se hereda porque viene adosado a la familia y las narrativas que se escuchan desde pequeño.

Por supuesto dicha operación no se reduce a pura imagería, se apoya en los intercambios efectivos que gobiernan la vida en sociedad. El color partidario persigue la ocupación territorial descrita en el apartado anterior garantizando que municipios y regiones queden pintadas de una u otra bandería, de tal suerte que se fue proyectando la geografía política que de tantos modos se mantiene intocada hasta hoy día³⁵. En las ciudades y poblados las calles se podían repartir de manera uniforme, impidiendo el paso de los contrarios. La coincidencia de la filiación familiar con las autoridades significaba el acceso a la tierra, al crédito, a la escuela para los hijos, a las redes clientelistas y a la conexión con la institucionalidad estatal. El partido significaba la disponibilidad de una apretada red de solidaridades o, en caso contrario, el conflicto y la exclusión.

Desde luego, la invasión a lo privado tiene su correlato en una estructura de lo público donde la violencia está a la mano. En primer término el estado,

³⁴ *El Siglo* era el diario nacional del conservatismo, *El Tiempo* del liberalismo.

³⁵ La Costa Caribe y los Santanderes liberales, Antioquia y Cauca conservadores.

frente al partidismo, no puede operar como mediador del conflicto en tanto la pugna cercena su autonomía. El régimen le arrebató la función simbólica de operar como un espacio neutro, esto es, como un lugar que pese a ser la sede del poder encarna una entidad que está más allá de divisiones y disensos. No es el caso del partidismo colombiano; de manera distinta, no se mantiene ninguna “distancia” frente al estado puesto que el partido está por encima de él, es quien le crea y le confiere rostro. El ascenso al poder de alguna de las colectividades inaugura una era por completo nueva –se pensaba en aquel entonces–, como si no fuera posible percibir la continuidad en el estado y las instituciones. El estado pierde su función de mediación. Es más, en buenos términos el conflicto no es legítimo pues el Otro no debía existir. Por ello cuando hay alternación partidista se intenta asegurar las mayorías aniquilando al adversario.

En segundo lugar lo religioso tampoco representó un fiel de la balanza con la capacidad de crear algún lugar para la conciliación entre los partidos. Todo lo contrario, la aparente disputa por los emblemas religiosos ahondó la escisión desde el instante en que la iglesia tomó partido desembozado por una de las agrupaciones partidarias. Los más robustos leños de la hoguera podían salir de los púlpitos de las iglesias lanzados por curas sectarios que no reparaban en sus denuestos contra el liberalismo. En la alianza partidista del clero hay que buscar uno de los resortes por los cuales Colombia prolongó sus violencias más allá del siglo XIX. El estado no sólo dejó de establecer sus linderos seculares –la constitución del 86 es católica y le entrega un papel capital a la mediación clerical–, sino que la fusión de fe y política bajo una bandera fue la puerta grande por donde se aseguró la invasión de lo público sobre lo privado.

Por último el partidismo echó los cimientos de una ciudadanía que, de manera contradictoria, la cruzaba el recurso a la violencia. El amor a la patria y al bien común armó el horizonte sobre el que se constituía el sujeto político. En este sentido los partidos políticos construyeron una esfera pública inspirada en la vertiente republicana de la ciudadanía. Con todo, en medio de las guerras civiles fue fraguando la visión heroica y trágica de la política según la cual el máximo honor consiste en morir por la patria y el partido. En realidad la patria, como el estado, carecía por sí misma de identidad: no era nada distinto a lo que le confiriera el partido. De manera que antes de entregar la vida por la patria se la entregaba por la colectividad. La distancia entre morir por el partido y matar por el partido se vuelve borrosa. De tal suerte, la paradójica figura del ciudadano en armas adquiere plena vigencia. Ninguna de las referencias fundadoras de la ciudadanía quedó al abrigo de la escisión, ni siquiera los relatos fundacionales de la nación: para los liberales ella se había erigido bajo la figura tutelar de Santander y su tradición jurídica, mientras para los conservadores lo había hecho desde las enseñanzas del libertador Simón Bolívar. Todo evoca fragmentación y la coloración se defiende en últimas en

el campo de batalla. El ciudadano no es el agente universal de derechos, es el militante del partido. La ciudadanía instaurada hasta mediados de siglo, a pesar de su apelación a la democracia y el voto, tenía un fundamento precario en las gramáticas de la modernidad; tuvieron mayor peso la pertenencia primordial y el recurso a las armas.

C. El narcotráfico

El partidismo genera fragmentaciones que se superponen a las generadas por la ocupación territorial. El colono y el ciudadano en armas se imbrican. La simbólica partidaria prende el combustible violento, justo, en aquellas regiones de antiguos conflictos agrarios o de colonización reciente³⁶. El partido y sus modos de operación se estructuraron a lo largo de una historia secular, las colectividades se fundaron en los años 40 del siglo XIX. De manera paradójica, esa misma fuerza histórica fue el detonante de su destrucción violenta. Para la década del 40 del siglo XX la pugna partidista ha sido desbordada por las muchas transformaciones que el país vive por ese entonces; la creciente conflictividad social encuentra sólo de manera precaria alguna expresión política. El lenguaje de los partidos, terco, se resiste a abandonar sus viejos moldes que ya para ese momento se exhiben anacrónicos. Su vigencia, no obstante, está lejos de desvanecer. La acrecida movilización gaitanista termina encuadrada en sus molduras, de tal modo que el asesinato del líder en 1948 reactualiza el partidismo en su máxima expresión. Por aquellos años no existía otra manera de descifrar lo público y lo político –ni las disidencias partidistas ni la izquierda habían podido construir una manera alternativa de hacer política–. En el abismo abierto entre el partidismo y el conflicto social brota la violencia. De allí el rostro bizarro e incomprensible que preside la práctica de campesinos que se matan entre sí con saña y crueldad. El absurdo del antagonismo partidista expuso en la Violencia todas sus caras, los dirigentes lo entendieron dando forma al acuerdo que puso término a la lucha centenaria.

Se cierra el partidismo pero se abre una renovada discordia, ahora desde los lenguajes de las guerrillas contemporáneas. Durante década y media su guerra fue pequeña y localizada, se hizo necesario el concurso del narcotráfico para que se magnificara con toda su potencia. Sin la menor duda, la guerra actual de Colombia resulta impensable sin el dinero que le inyecta la empresa ilegal de las drogas. La violencia se acrecienta bajo el influjo de su poderosa presencia. Los efectos están a la vista. Entre los años de 1980 y 1996 las FARC experimentó un crecimiento insospechado, pasó de ser una agrupación de 10 frentes a convertirse en un poderoso ejército de 62. A la vez, aunque por fuentes de

³⁶ Recordemos que en las zonas integradas la violencia no salió de los términos partidistas; en las zonas retiradas, pese a sus tendencias revolucionarias, tampoco abandonó el lenguaje partidista.

financiación distintas, el ELN pasó de 3 a 41 frentes³⁷. La progresión del aparato militar de las guerrillas se traduce, por supuesto, en la sorprendente ampliación de las zonas de operación. Si en 1985 tenían presencia en 173 municipios, en 1995 la tenían sobre 622³⁸. El paramilitarismo, en contraprestación, experimenta un fortalecimiento tardío pero más marcado. Si a comienzos de los años 90 era una organización conformada por 4000 soldados, ante la ley de justicia y paz del gobierno Uribe se han entregado alrededor de 31 mil hombres.

El narcotráfico introduce fragmentación en una y otra esfera de la organización colectiva. Inflama la guerra abierta, según se constata en el crecimiento y expansión de los actores en armas. Por demás, él mismo se convierte en otro actor con potencial para enfrentarse al establecimiento. El estado sufre un acelerado proceso de fractura de su legitimidad, las ingentes cantidades de dinero que maneja le permiten el ejercicio de la corrupción a todos los niveles. A nivel de la sociedad difunde la racionalidad del dinero fácil ganado mediante la acción audaz y sangrienta, diseminando en la sociedad una violencia difusa pero tenaz³⁹. La plena coincidencia entre auge del narcotráfico y ascenso de la violencia durante la segunda mitad de los 80 no deja abrigar ninguna duda sobre el papel propiciatorio del narcotráfico⁴⁰.

El narcotráfico es el operador de la crisis y la guerra contemporánea de Colombia. Sin él las guerrillas no hubieran cimentado el poder geopolítico que llegaron a desplegar, como tampoco hubiera sido concebible el desarrollo vertiginoso del aparato paramilitar. Echó raíces en Colombia y no en otros países cercanos como Venezuela y Ecuador, mientras Perú tuvo cultivos ilícitos y guerrilla sin acercarse a nada parecido a una guerra de vastas proporciones. Fuerza concluir en torno a las condiciones propicias que presentó Colombia para el implante del narcotráfico: un sedimento de fragmentación, ya en poblaciones de colonos recluidos en zonas apartadas de toda tutela del estado y la institucionalidad, ya en la existencia de actores en armas y un pasado de confrontación.

D. Democracia y violencia

Los tres determinantes de la larga duración —las fragmentaciones—, encuentran su último lugar de reciclamiento en los vínculos entre democracia y violencia. Colombia es el país con las instituciones de la democracia representativa más estables y antiguas del continente. En efecto, algunos ejes capitales

³⁷ Las FARC creció a la sombra del narcotráfico, el ELN de los energéticos, en especial del petróleo.

³⁸ Echandía (1999).

³⁹ El caso ejemplar lo encarnó Medellín, donde el vínculo directo del narcotráfico con la población convirtió a la ciudad en la urbe más violenta del mundo.

⁴⁰ En 1980 el país tiene una tasa de homicidios de 34 por 100 mil habitantes. En 1985 sube hasta 43 pero de ahí en adelante experimenta un ascenso geométrico que le lleva en 1991 a 93.

de la construcción democrática no sólo aparecieron en fecha temprana⁴¹, sino que tuvieron el vigor de mantenerse casi de manera ininterrumpida. Mientras otros países latinoamericanos desembocaron en prolongadas dictaduras civiles y militares, la vigencia de los gobiernos civiles colombianos se truncó en nada más que dos oportunidades. Entre 1830, año de disolución de la Gran Colombia, y 1958, momento en que tanto Venezuela como Colombia suscribieron acuerdos que transforman sus respectivos sistemas políticos (en Venezuela el pacto de Punto Rojo, en Colombia el Frente Nacional), Venezuela vive cinco gobiernos civiles con apenas siete años de duración, mientras Colombia experimenta nada más que dos golpes militares con 6 años en el poder. En el siglo XX hubo sólo el mandato militar de Rojas Pinilla durante reducidos cuatro años, además conducido al poder con la anuencia de las élites civiles. Colombia es un país tan afecto a sus arraigadas tradiciones democráticas como esquivo a las tiranías y señoríos personales⁴². Sin embargo la fortaleza del estado de derecho se acompaña, de manera contradictoria, por una violencia que hace presencia cada determinado tiempo y que de los años 40 hacia acá no desaparece.

El rasgo característico consiste en que las instituciones democráticas son capaces de sobrevivir a las peores crisis. Ahí reside su fuerza, ahí reside su debilidad. Tanto en los años finales de la década del 40 como en la segunda mitad de los 80 el país se vio enfrascado en crisis sin precedentes. En los 40 Gaitán fue asesinado, el congreso clausurado, los liberales se abstuvieron en las elecciones y la violencia se irrigó; en los 80 el narcotráfico desató una guerra pavorosa, los actores armados emprendieron un sinnúmero de incursiones y la violencia urbana se disparó. Sin embargo, en los dos momentos, las elecciones se verificaron, los presidentes fueron elegidos y sus mandatos entraron en vigencia como si las cosas funcionaran más allá de la turbulencia: hay una compleja desconexión entre instituciones y conflicto. El estado y la sociedad hacen francos intentos de establecer el nexo con la conflictividad y la violencia, así como lo deja ver el emprendimiento de importantes procesos de ampliación democrática como la elección popular de alcaldes y la Asamblea Constituyente. La confrontación, pese a ellos, no se detiene; es más, en algunos casos sirven como puntal de escalamiento de la guerra⁴³. Se trata de una democracia cuyos engranajes pasan, en algún momento, por un ejercicio consustancial de la violencia.

La conexión democracia y violencia no sólo tiene la cara de la estatalidad y sus instituciones; tiene una más, la de la sociedad. Las prácticas violentas del

⁴¹ La primera alternación en el poder se realizó en la segunda mitad de los años 30 del siglo XIX y los partidos políticos aparecieron poco tiempo después.

⁴² Aquí no hubo nada parecido a Porfirio Díaz en México, Juan Vicente Gómez en Venezuela, la familia Somoza en Nicaragua o las dictaduras militares del Cono Sur, por mencionar algunos casos.

⁴³ Es el caso de la descentralización administrativa.

siglo XX son en una considerable proporción movilizaciones activadas desde el ámbito de lo popular. Arrancando con la guerra de los Mil Días y hasta la actualidad, pasando por las violencias partidistas de los 30 y 40, el cuadro de la guerra constata la actividad decisiva de cuadrillas y guerrillas conformadas en su abrumadora mayoría por hombres campesinos. Lo dijimos, allí hay una tozuda permanencia. Además, durante la violencia contemporánea aflora en los barrios populares urbanos una abigarrada gama de actores imponiendo dominios violentos, con una extensión e intensidad que no es posible verificar en otras ciudades latinoamericanas⁴⁴. Se trata de la proliferación de pandillas, operaciones de limpieza, escuadrones de la muerte, defensas organizadas por vecinos, cruentas seguridades privadas, crimen organizado y difuso. La sociedad tiene una importante cuota de participación en la construcción del hecho violento, este no se reduce a los ejércitos y sus desmanes. La fórmula de “guerra contra la sociedad” habría de ser cambiada, más bien, por la de guerra en la sociedad.

Para concluir

La política de seguridad democrática del gobierno Uribe ha modificado de muchos modos el panorama de guerra desbordada y violencia incontrolada, reinante hasta antes de su ascenso. Existen varios hechos indicativos. La guerrilla ha sido minada con severidad y el paramilitarismo pasó por un proceso de incorporación a la vida civil, al tiempo que la criminalidad y las tasas de homicidio se vienen reduciendo. Los notables resultados en estas variadas direcciones son el pilar sobre el que descansa la elevada popularidad del presidente, tornando visible una vez más la abrumadora esperanza de paz que embarga a Colombia. El ablandamiento del conflicto violento proviene en grado considerable de un ejército más técnico y provisto de una nueva moral; respecto a administraciones anteriores sus ataques se han doblado. Mas el ablandamiento proviene también del acuerdo estratégico con el paramilitarismo y, a través suyo, con las mafias. La negociación con las autodefensas les permitió operar en los dos planos, el legal y el ilegal. El resultado es su comprobada incursión en la política y la economía, así como lo revelan las cantidades de dinero en juego en las campañas políticas de 82 congresistas a quienes se les sigue un proceso judicial por nexos con el paramilitarismo, incluida la cúpula del partido del presidente. Una muestra más de los modos como la democracia le sobrevive a las peores crisis.

De tal manera, y muy a contracorriente, la paz no se halla todavía al alcance de la mano. Los hechos son igual de indicativos. La guerrilla no está derrotada;

⁴⁴ La reconstrucción de estos actores y la comparación con otras ciudades del continente en Perea (2007).

distintos sectores del paramilitarismo se han reorganizado militarmente; los cultivos ilícitos y los carteles de la droga permanecen ilesos; en rincones rurales y aglomeraciones urbanas el asesinato encuentra formas de reciclamiento. El homicidio, ese contundente indicador del estado de las violencias, viene disminuyendo con fuerza pero aún no alcanza a llegar a un valor por debajo de 30⁴⁵. El hecho incontrovertible es que al día de hoy la violencia no cesa. A finales de la primera década del siglo XXI el país sigue enfrascado en un conflicto interno que goza de la triste solemnidad de ser una de las tres conflagraciones armadas más antiguas del mundo, sin visos de resolverse todavía⁴⁶.

Naturalmente el tema de este cierre no es la seguridad democrática en sí misma. El punto crucial es si, una vez vista la historia de la violencia del siglo XX, la paz llegará a Colombia sobreponiéndose a las fuentes seculares de fragmentación, las mismas que se vienen superponiendo para dar origen a las violencias. La paz necesita más que la guerra, y mucho más que la guerra pactada con poderes mafiosos e ilegales. Demanda resolver fuentes históricas de conflicto mediante la respuesta a necesidades históricas de los sectores populares, como bien lo muestra el problema del agro y la tierra. Requiere desactivar los focos de la guerra, los viejos y los nuevos, mediante la institucionalización del estado y su papel mediador del conflicto. Exige, ante todo, una solución al acuciante problema del narcotráfico, el que al día de hoy permanece sin la menor política pública que le desactive y contenga (se han fumigado cientos de hectáreas, un intento de exorcizar el problema por el eslabón menos importante de la cadena). Y en el corazón de todo ello la paz exige sociedad. Retornamos al punto por donde inició este escrito –el lugar de la sociedad–, para decir que la paz será impensable sin un proceso desde abajo, desde un trabajo de artesanía en la reconstrucción del vínculo y la convivencia.

⁴⁵ Como punto de referencia la tasa mundial de homicidio en el año 2000 fue de 8 homicidios por 100 mil habitantes (OMS / OPS, 2002). Brasil y México, dos países con violencias preocupantes –más el último con la reciente explosión del narcotráfico–, tienen tasas de homicidio por debajo de 20.

⁴⁶ Es el conflicto interno más viejo del planeta, pues los otros dos son confrontaciones entre estados (la guerra entre palestinos e israelíes y la guerra entre India y Pakistán por la zona de Cachemira), ambas iniciadas en 1948.